

Es bienvenida, a pesar de lo tardía, la mayor participación de la Procuraduría habida cuenta de que ha contribuido a agravar la crisis por su negligencia de años y por haber generado la parálisis político-institucional con la suspensión del Gobernador.

Pero tenía que hacer algo contra una gestión pública deficiente en la mitad de una bonanza presupuestal, a donde importaba más el gasto que la solución de problemas concretos y urgentes. La Procuraduría también está tratando de tomar medidas de reparación por sus errores de omisión y permisividad del pasado que agravaron la crisis.

Busca ahora no solo castigar sino también cumplir otras de sus funciones como son sugerir iniciativas públicas correctivas y luego supervisar que se lleven a cabo.

Su mayor intervención y seguimiento no solo recuerda su inefectiva acción pasada, sino que deja mal parados a empleados públicos y a instituciones locales y nacionales, que fueron casi que obligados a enfocarse en acciones para superar la crisis.

Y es que todo parece caerles por sorpresa, cuando todo mundo se da cuenta de las crisis acercándose con pasos de animal grande.

Aún no están las pólizas de seguro que debieron haber tramitado hace tiempo para que rueden ambulancias, y no hay un plan de contingencia frente a la temporada de lluvias y huracanes que este año pronostican será más activa que la normal. Las autoridades necesitan más autocrítica y más vigilancia por parte de las entidades de control.

¿Un alto en el camino para mejorar las cosas?

Pero la labor de la Procuraduría tiene sus límites y se complica con la cautela con que en esferas oficiales se manejan los asuntos en crisis (salud, medio ambiente y seguridad) para no afectar la economía local.

La institución quiere una declaratoria de emergencia pero el gobierno nacional no lo desea porque implicaría aceptar que fracasó en sus gestiones en las islas y ellos y el gobierno departamental están bajo presión de los gremios en las islas, que se oponen por su preocupación de que la medida vaya a afectar el flujo de turistas.

Pero medidas como esas podrían ser favorables para las islas, que en todo caso no puede seguir como está recibiendo casi un millón de turistas porque no hay agua, no hay donde poner las basuras y se está causando un irreparable daño al medio ambiente. Al turista hay que protegerlo también contra el flagelo de la delincuencia.

Aunque la violencia ha cobrado la vida de muchísimos isleños, de llegar a haber un turista muerto en esta coyuntura donde la isla ya está en 'alerta roja' en el mapa turístico, se dañaría considerablemente la industria. Los atracos comunes ya están ahuyentando a muchos. ¿No sería mejor atender el problema antes de que sea demasiado tarde y se causen más daños?

La protección ambiental puede reducir el flujo de turistas y declarar emergencias los espanta y termina generando desempleo, pero puede ayudar a las islas en el largo plazo. Si no se declara la emergencia ambiental y/u hospitalaria quizás se tomaría como una inacción que pone en peligro la vida de los isleños y de seguro llegarán más sanciones y se podrían agravar aún más los problemas.

La mesa de evaluación de la crisis a instancias de la Procuraduría está dominada por entidades nacionales porque el gobierno nacional debe asumir mayor responsabilidad en resolver la crisis pero también porque debe aceptar una responsabilidad mayor en la generación de la crisis.

Esa mesa es algo excluyente por una razón simple: se necesita mucho dinero y ese dinero está en Bogotá, aunque este gobierno está despidiéndose y parece poco importarle las cosas. Sería inadecuado excluir a sectores económicos y sociales de las islas y se debe buscar una

forma de representación dentro de los límites de tiempo.

No es mucho lo que el Departamento pueda hacer para superar la crisis aparte de proveer liderazgo y buen manejo de fondos, ambos en entredicho por la suspensión del Gobernador y por la crisis política y el vacío institucional que hay después de la salida de Housni (que puede volver en menos tres meses si presenta y gana la apelación de la suspensión de los 10 meses adicionales).

Por eso el Gobierno Nacional debe hacer más, mostrar mayor preocupación por la crisis, gastar más en las islas pero con más controles porque en parte la crisis actual es por el aumento considerable del gasto que estuvo incontrolado, poco supervisado y poco orientado, lo cual agravó a su vez varios problemas por falta de atención.

Housni no está solo en esto

Fue irresponsable y contraproducente que se haya ordenado el cierre del botadero sin ofrecer una solución al problema de la basura. La movida confirma la necesidad de la acción coordinadora, traslada simpatía hacia la Gobernadora encargada, a la vez que concentra atención hacia la incapacidad de instituciones nacionales en atender asuntos urgentes y de manejar fondos.

Y la atención se vuelva a centrar en el despilfarro de 32.000 millones en el elefante blanco de la planta incineradora RSU sobre el cual casi todo mundo mantenía silencio, reforzando la percepción de una ola de permisividad que llevó a gastos innecesarios, injustificados, incontrolados, bajo sospecha de corrupción y de poco efecto en la solución de los múltiples problemas.

Por todo esto, el Gobierno Nacional, la Procuraduría y la Contraloría (y hasta la comunidad por no protestar y exigir explicaciones de manera contundente) deben compartir responsabilidad por haber permitido e ignorado un esquema administrativo y de gasto sin importar su destino.

Pero ante todo, por no haber anticipado lo del hospital, ignorando las señales de crisis que venían haciendo caso omiso, además, a las advertencias de que el sector público no atendía problemas sociales, ambientales y de salud pública y manejaba mal recursos públicos.

La actuación en el pasado de las entidades de control dejan muchas dudas sobre su efectividad. La pregunta ahora es si se repetirá el ciclo de crear fama y zozobra y luego echarse a dormir o si realmente harán algo de fiscalización que le devuelva tranquilidad a las islas.

¿Mucho ruido y pocas nueces?

Mientras tanto, las presiones mediáticas de la Procuraduría —y el silencio de la Contraloría— pueden resultar en poco o nada porque la incertidumbre y la virtual parálisis político-administrativa estarían perjudicando la toma de decisiones.

Limita el rango de acción del gobierno local encargado y es por esto que la coalición de eligió Housni debe ponerse de acuerdo en qué es lo que desean. Todo puede ser en vano si se levanta la suspensión de los 10 meses 'extras'. Se aumentará la incertidumbre y se profundizará las crisis si todo vuelve a lo mismo después de los tres meses.

El rango de acción político-administrativa también estaría limitado por el doble rol de la actual primera autoridad de todos los isleños, a la vez promotora del sector turístico, que a veces se enfrenta con la gestión departamental en la protección ambiental, construcciones hoteleras, regulaciones, y otros temas.

La presente crisis está lejos de ser superada pero la acción de la Procuraduría puede ser un catalizador que fuerce al gobierno local y nacional a entregar soluciones. Ojalá la Contraloría y la Supersalud también intervengan porque deben señalar más personas responsables de estas crisis y para el bien de las islas es adecuado poner algo de luz en el turbio mundo de manejo de sus fondos públicos.

La crisis no debe ser usada para barrer irregularidades debajo del tapete, sino de hacerlas públicas para que al ver que se actúa con sanciones se quita el incentivo a funcionarios de cometer irregularidades y se incentiva a la mayoría de ellos que son honestos trabajadores a sentir que pueden lograr cosas para el bien las islas.